

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310500120140148301, promovido por la señora **KATHERINE CUARTAS JULIAO**, en contra de **COMPAÑÍA DE RECURSOS GEOLÓGICOS SA, JUAN FERNANDO ÁLVAREZ BETANCUR, SONIA ELENA ÁLVAREZ BETANCUR, ELSY MARÍA ÁLVAREZ BETANCUR, HERNÁN DARÍO ÁLVAREZ BETANCUR, BETHY DEL SOCORRO ÁLVAREZ BETANCUR Y GLORIA BEATRIZ ÁLVAREZ BETANCUR**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín,

en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **186**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Cuartas Juliao interpuso acción laboral, solicitando, la declaratoria de un contrato laboral a término indefinido, desde el 1 de enero de 2011 y el 15 de octubre de 2014, fecha en la que terminó el contrato de manera unilateral por justa causa por la falta de pago de los salarios entre el 1 de abril de 2014 y el 15 de octubre de la misma calenda, se ordene el pago de los salarios causados en este interregno laboral, el pago de la indemnización por despido injusto, la sanción por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, las cesantías por todo el tiempo laborado, los intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicio del año 2014, los aportes en salud, pensión y riesgos y lo que ultra y extra petita se declare.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que entre el 1 de enero de 2011 y hasta el 1 de abril de 2012 laboró con los accionados mediante un contrato verbal, el cual desde el 1 de abril del año 2012 hasta el 15 de octubre del año 2014 fue escrito y a término indefinido, hasta que por justa causa en atención a la falta de pago de sueldos culminó la relación. Explicó que la labor era de directora técnica, dibujante de geología y arquitectura con una asignación en cuantía de \$1.500.000. Además, que a la terminación de la relación laboral se le adeuda todo lo solicitado en el acápite de pretensiones.

Admitida la demanda, se dispuso la notificación a los accionados, siendo replicada así:

La señora **Elsy María Álvarez Betancur** contestó el libelo gestor indicando que no le consta lo expuesto en el escrito de demanda pues no la unió relación laboral alguna con ella ni la conoce. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso la excepción de inexistencia absoluta de la obligación, empero, ante las deficiencias de la contestación de la demanda, el Juzgado de conocimiento dio ciertos los hechos 7, 8 y 9, que en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. Y S.S. la juez determinó como aquellos en los que se solicita lo ultra y extra petita.

Mediante auto del tres (3) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el despacho desvinculó del proceso a las accionadas **Sonia Elena Álvarez Betancur, Hernán Darío Álvarez Betancur, Bethy del Socorro Álvarez Betancur y Gloria Beatriz Álvarez Betancur** ante la desidia de la parte actora a notificar el auto admisorio de la demanda.

Finalmente, respecto a **Juan Fernando Álvarez Betancur y Compañía de Recursos Geológicos S.A.** se dio por no contestada la demanda en auto del primero (1) de agosto del año dos mil dieciséis (2016).

En sentencia proferida el veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a las demandadas de las pretensiones invocadas en su contra, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada y condenando en costas a la parte accionante.

Corrido el traslado para alegar, no hubo pronunciamiento alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia consistirá en establecer si existió una relación laboral entre las partes, si ésta feneció de manera unilateral e injusta por causa imputable al empleador, y si se adeudan las acreencias laborales descritas en el líbelo genitor.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

Es así, como en la especialidad que nos atañe, quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, situación que en voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

El contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otro empleador, donde el primero presta personalmente sus servicios orientados bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, en el Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”.

Igualmente, en el artículo 24 *ibídem* expuso lo siguiente:

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”. *(subrayas y negrillas de la Sala)*

Es así como mínimo, en principio el trabajador, debe acreditar la prestación personal, la cual, definida en el artículo 5 del C.S.T., se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Es precisamente este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio

siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores; pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, pero éste no será de naturaleza personal. Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador.

A propósito de la subordinación, es el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible, pues el trabajador se somete al empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios y reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo, la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador.

En el plenario se constata que el único elemento probatorio arrimado es, el documento que se denomina “CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO” en donde se deja ver que el señor Juan Fernando Álvarez en calidad de representante legal de Compañía de Recursos Geológicos S.A. pactó con la señora Katherine Cuartas Juliao una relación laboral para desempeñarse como directora técnica desde el 1 de abril del año 2012.

Este documento, único elemento de prueba incorporado al proceso, no es determinante al momento de declarar la existencia de la relación laboral que se depreca, pues si bien a la luz del artículo 244 del CGP dicha pieza procesal cuenta con valor probatorio para determinar en un principio, el tipo de contrato, la duración y las partes en el mismo, no es definitivo para dar claridad sobre si existió o no en vínculo contractual, pues el acuerdo de voluntades es una cosa y la ejecución efectiva del mismo, es otra muy diferente.

Es decir, la prestación personal del servicio tendría que haberse acreditado por la demandante, mediante los demás medios demostrativos existentes para ello, pues la prueba de la suscripción de un contrato, no acredita que en efecto se hubiere dado tal ejecución, siendo contrastada tal documental únicamente con el dicho de la demandante en los supuestos de hecho de la demanda, pues no se allegaron otros medios de convencimiento como testimonios o documentos que den cuenta de la ejecución de las labores contratadas. Valga decir que tampoco acreditó en el proceso haber terminado de manera unilateral la presunta relación laboral por causa imputable al empleador, como lo expuso en el líbello genitor.

La Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 2804 de 2020, determinó sobre la libertad y formalidades del contrato de trabajo:

“El artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo reivindica esta regla de libertad de formas al consagrar que «el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no requiere de forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario». Por ello, la jurisprudencia laboral ha dicho que «el contrato de trabajo en cuanto género, no está sometido a una forma determinada para su existencia, por lo que para su nacimiento es suficiente con que concurra un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador» (CSJ SL2600-2018). Igual suerte corre la mayoría de los convenios y acuerdos celebrados por los trabajadores y empleadores en el marco de la relación de trabajo, los cuales no requieren por regla general de un medio o vehículo específico para su eficacia.

Por excepción, la ley exige el cumplimiento de una forma específica para la formación del acto o su prueba, denominadas en el primer caso formalidades sustanciales, constitutivas, ad substantiam actus o ad solemnitatem, y en el segundo, ad probationem.”

Ello así, la Sala advierte que la prestación personal del servicio no fue acreditada de suerte tal, que tampoco puede activarse la presunción de existencia del contrato de trabajo, pues es claro que la carga de la prueba recaía exclusivamente en la demandante, quien debía demostrar que había prestado personalmente sus servicios en favor de la sociedad demandada, esto es, que había realizado por sí misma (artículo 23 del C S T), las actividades enunciadas como funciones del cargo desempeñado, sin que tales hechos se hubieren probado, según y conforme lo descrito en las líneas que anteceden.

Ahora, si bien se dio por no contestada la demanda respecto a Compañía de Recursos Geológicos S.A. y Juan Fernando Álvarez Betancur es imperioso que la Sala aclare el alcance del parágrafo del artículo 31 del CPT Y SS el que indica:

“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado.”.

El indicio, como ficción jurídica no se torna absoluto, pues no libera a la parte demandante de cumplir las cargas propias del artículo 167 del CGP.

Así las cosas, le asistió razón al *a quo* en absolver a las accionadas de las pretensiones invocadas, por tanto, la sentencia habrá de confirmarse.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia que se revisa en sede de CONSULTA.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a751b948a4e0a9c2af6d1b94eaad4218c156f83cfe1fd7ae27bc1733115ed1c8**

Documento generado en 22/06/2023 03:24:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>